

Burguesía nacional II

¿Qué significa hoy “burguesía nacional”?

*Pablo Galetti**

En estos días estuvo en boca de muchos si era factible y/o necesario recrear una “burguesía nacional” como base esencial para desarrollar un modelo productivo al servicio del país.

En primer lugar cabe señalar que la creación o no de una burguesía, más allá de su carácter, es un proceso histórico-social y no se puede determinar por la voluntad del Estado ni de ningún sector.

Para no entrar en connotaciones históricas que requerirían un exhaustivo análisis, nos limitaremos a señalar que lo que se llamó en nuestro país “burguesía nacional” tuvo como eje a la “burguesía industrial” que se desarrolló en la etapa de sustitución de importaciones y en particular durante la segunda guerra mundial. Sobre esta base se asentó el gobierno del general Perón y desarrolló un estado que distribuyó con mayor equidad el ingreso e implementó

beneficios sociales. (En varios años cerca del 50% del PBI lo percibían los trabajadores, hoy no sobrepasa el 20 %). El sector tuvo un fuerte respaldo del Estado y coordinaba su accionar con las empresas estatales. Probablemente podemos considerar como industrias modelo que se orientaban al mercado interno a SIAM Di Tella y FATE y las del Estado YPF o SOMISA que siguieron el legado de Mosconi y Savio.

En la década de los '50 surgió en Catamarca la Confederación General Económica (CGE), organización que agrupaba a pequeños y medianos empresarios del interior del país y de las economías regionales. Por su contenido como entidad se asemejaba a las reivindicaciones del pequeño y mediano productor del campo, de los chacareros y arrendatarios integrantes de la Federación Agraria Argentina (FAA), fundada en 1912.

* Autor de *Empresariado nacional y cambios sociales* (Anteo, 1985).

Junto con ellos tuvieron un papel activo las organizaciones de cooperativistas nucleadas en El Hogar Obrero y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC).

Estos sectores confrontaban sus intereses con la oligarquía agrícolaganadera, los terratenientes y el capital monopolista y financiero extranjero que estaban agrupados en la Sociedad Rural Argentina (SRA); la Unión Industrial Argentina (UIA); la Cámara y la Bolsa de Comercio y las entidades financieras. La matriz más reaccionaria fue, en tiempos de dictadura, el Consejo Empresario Argentino presidido por Martínez de Hoz.

Durante el período de las décadas de los '50 a los '70 la puja es permanente entre los sectores nacionales y los vinculados al capital extranjero. Puede afirmarse que la expresión más saliente de la "burguesía nacional" fue proyectada por José Ber Gelbard, quien fue nombrado ministro de Economía del gobierno de Cámpora-Perón. En su gestión, priorizó el mercado interno, promovió un "pacto social" con los trabajadores y propició, en el orden internacional, un vínculo independiente y de comercio con todos los países. Esto significó comerciar tanto con los países capitalistas, como con los socialistas.

En rigor, lo que Gelbard pretendía era desarrollar la economía del país y en particular su base industrial con un sentido autónomo

nacional, contrapuesto a los intereses de los monopolios extranjeros, en particular de los Estados Unidos y de la oligarquía terrateniente. Una expresión de ello, en esos momentos, fue abrir las compuertas del bloqueo económico contra Cuba y comerciar con ese país. Otra expresión fue lograr que con tecnología e inversión soviéticas se construyera la central hidroeléctrica de Salto Grande.

Esta actitud de independencia política y económica fue malamente utilizada por los sectores más reaccionarios de la gran burguesía local, entrelazada con los monopolios extranjeros, para lanzar acusaciones de que la "burguesía nacional" tendía a construir un régimen afín con el sistema socialista. Alvaro Alsogaray lo consideraba ya como tal. Ésta fue una de las banderas utilizadas por tales sectores para justificar el golpe de Estado de 1976 e implementar el plan ultra liberal de Martínez de Hoz, cuyo objetivo fundamental fue la destrucción lisa y llana de la industrial nacional y estatal para volver a transformar el país en agroexportador y extractor de materias primas. En rigor, fue un plan económico contrarrevolucionario, que perseguía también el objetivo de debilitar la existencia y organización de los trabajadores industriales, que estuvo asociado con la represión y los 30.000 muertos y desaparecidos, muchos de ellos cuadros y militantes que luchaban por una Argentina próspera e independiente.

Lamentablemente, en aquellos momentos algunos sectores del “ultraísmo de izquierda”, al calificar a todos los sectores empresarios por igual, como “burgueses”, favorecieron con su prédica los objetivos de la reacción. Gelbard tenía como enemigo dentro del gobierno Perón – Isabel Perón al tenebroso López Rega que lo atacaba, además, por ser judío.

Para desarrollar el mercado interno Gelbard promovió la formación de la COPYME, un órgano del Estado tendiente a favorecer la relación de las grandes empresas y las estatales con las pequeñas y medianas. No olvidemos que en los setenta el país había alcanzado un desarrollo significativo en la industria mediana, semipesada y pesada, tanto estatal como privada, con fuerte predominio de la metalmecánica. También se había alcanzado un desarrollo importante en la construcción de centrales atómicas con fines pacíficos y en tecnología de punta; se habían llegado a formar equipos de científicos que más tarde emigraron al Brasil y otros sitios del exterior.

Instalada la dictadura con la anuencia y el respaldo de las concepciones liberales y del mercado, Martínez de Hoz modificó la ley de Entidades Financieras e inició el camino de la destrucción de los bancos nacionales y cooperativos, la concentración financiera y el aperturismo económico. Es la etapa de la llamada “patria finan-

ciera” que favoreció a la banca extranjera y a determinados sectores financieros del país. Tuvo el respaldo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Unión Industrial Argentina (UIA), las Cámaras y Bolsas de Comercio, las entidades financieras foráneas y otras que conformaban el “grupo de los ocho”. En el ámbito del Consejo Empresario Argentino se elaboró el plan económico de la dictadura.

Todo este proceso de cambio estructural regresivo y concentrado continuó luego con los llamados “capitanes de la industria” y se corona con la “convertibilidad” de Menem-Cavallo-De la Rúa, que instaló definitivamente el pensamiento “neoliberal” aplicando los postulados del Consenso de Washington y el fundamentalismo de mercado.

Este aperturismo indiscriminado, con el pretexto de incorporar al país al “primer mundo” y ganar en “eficiencia”, destruyó los restos del aparato industrial y productivo. De las 140.000 fábricas que había en los setenta quedaron la mitad y se liquidaron más de 200.000 unidades productivas del campo. Cerraron decenas de miles de comercios por la invasión de los supermercados, la mayoría de ellos en manos de capitales extranjeros. Durante este período se privatizaron las empresas básicas del Estado, incluida YPF.

El capital externo que se incorporó no abrió fábricas ni generó trabajo. Se limitó a comprar a ba-

jo costo más de 1.000 empresas de los “burgueses nacionales”. En su mayoría, éstos no obraron en defensa del interés nacional. Ante la posibilidad de vender en dólares el patrimonio, en su mayoría terminaron fugando el dinero hacia el extranjero, transformándose en rentistas y especuladores o inversores en servicios.

De este modo, lo que alguna vez se llamó “burguesía nacional”, con base económica cierta y con respaldo de las empresas del Estado, quedó económicamente debilitada. Hoy, de las 100 empresas más importantes, más de 80 están en manos extranjeras. Y empresas de capitales de origen local, tales Pérez Companc, Bunge y Born, Techint, Pescarmona, Macri, Ledesma, Loma Negra, etc., están entrelazadas con capitales externos y operan como multinacionales.

De lo aquí brevemente expuesto queda claro, a nuestro entender, que es imposible retrotraer la economía a los parámetros de la década de los setenta y restaurar de alguna forma una “burguesía nacional” con peso propio y orientada a consolidar un país libre e independiente, que encauce su economía al servicio de las mayorías, con equidad y justicia.

En el hipotético caso de que de alguna forma se pudiera restaurar en las nuevas condiciones históricas, ¿cuál es la garantía de que pudiera jugar este papel, teniendo en cuenta su conducta oscilante,

con tendencia al posibilismo, al compromiso con las clases dominantes y al imperialismo?. Esto nos conduce a la idea de que no es en sí misma garantía como factor de cambio social y político en un sentido progresista.

Hoy lo esencial para el país es generar trabajo, terminar con la marginación social, redistribuir la riqueza, reducir los pagos de la deuda externa y terminar con los privilegios de los grupos concentrados, del capital especulativo, y en particular de los bancos extranjeros y de las minorías beneficiarias de las políticas de los noventa.

Para poder llevar adelante un programa de reales cambios estructurales y a su vez evitar que el país se entregue a proyectos que significarían reducir la nación a una colonia, como el del “Área de Libre Comercio para las Américas” (ALCA), se impone la necesidad de consolidar la presencia activa de los nuevos actores sociales dispuestos a enfrentar la dominación externa y combatir las concepciones neoliberales sostenidas por Estados Unidos y el grupo de los siete. Vale la pena recordar que en la década de los ‘90 nos impusieron un adelanto del ALCA con el llamado fundamentalismo de mercado.

Por supuesto, existen “empresarios nacionales” o burgueses y pequeños burgueses nacionales que en su conjunto conforman el sector de las pequeñas y medianas

empresas, en su mayoría de carácter familiar. Son industriales, productores agrarios, comerciantes y prestatarios de servicios que numéricamente sobrepasan el millón y medio de unidades económicas y generan cerca del 40 % del PIB. Su actividad se caracteriza por ser la que más mano de obra demanda, en especial en las ramas industrial y de servicios. Su vínculo esencial es con el mercado interno; sólo una decena de miles venden al exterior (conviene recordar que las grandes exportaciones -de productos agrarios y *commodities*- están en manos de un puñado de multinacionales. Y en cuanto al petróleo, Menem concretó lo que ningún país ha hecho: “regaló” la fuente petrolera, en este caso a una empresa española.

Los pequeños y medianos empresarios están estrechamente ligados con los sectores de las capas medias, como los estudiantes universitarios, profesionales, técnicos, intelectuales, y sectores de la burocracia estatal. También gran parte de los políticos provienen de estas capas. Su vínculo con los trabajadores es contradictorio, aunque son mayoría los que entienden que en rigor y en última instancia los trabajadores representan “su” mercado interno (no intentaremos aquí un análisis desde lo humano, lo psicológico, lo cultural y su visión como clase social).

Lo que sí puede apreciarse se-

gún nuestro criterio es que no existe esa “burguesía nacional” y esencialmente industrial capaz de desempeñar un papel hegemónico con un proyecto nacional, autónomo e independiente. Tampoco se la puede recrear voluntariamente. De ahí que la idea de instalar un “capitalismo nacional en serio” resulte una expresión de deseos.

Para analizar las posibilidades futuras debemos partir de lo que tenemos. El nuestro es un capitalismo dependiente -lo fue desde siempre: antes con los británicos, después con los estadounidenses- acentuado ahora en la etapa de la “globalización” y en esta fase “neoliberal” del capitalismo.

El camino para generar un cambio progresista y de avanzada es estructurar una alianza de los sectores de la pequeña y mediana empresa (autodenominado “empresariado nacional”) con gran parte de los demás sectores medios y los trabajadores, ocupados y desocupados, para construir la alternativa que en esencia debe ser una sociedad de democracia participativa, con un Estado de nuevo tipo que garantice una economía social; que no signifique una vuelta al estatismo tecnocrático sino la participación activa de todos los sujetos sociales. Con la presencia de empresas mixtas y un espacio público participativo y democrático. En tales visiones las corrientes de centroizquierda e izquierda divergen en la proyección

y las formas de ir construyendo desde lo social y político una sociedad equitativa y solidaria, con un nuevo tipo de Estado. En la capacidad de ir encontrando caminos superadores que partan de la realidad concreta está la posibilidad de éxito. Esto presupone no conciliar con los grupos concentrados del poder e impedir la imposición del ALCA y los dictados del FMI.

Con semejante visión están desarrollando su actividad organizaciones como la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME), la Federación Agraria Argentina (FAA), el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), otras entidades afines y muchos centros y cámaras de base de todo el país que tratan dentro de las limitaciones actuales, de recrear una fuerza capaz de defender las reivindicaciones mínimas de las pequeñas y medianas empresas y contribuir a una alianza con otros sectores sociales cercanos a los cambios que el país necesita.

Con este contenido debe avanzar la idea de construir un movimiento político y social, donde desde lo social y lo político se configure una alianza que aglutine a las mayorías nacionales para forjar un nuevo país y hacer cierta la consigna del Foro Social Mundial de que "otro mundo es posible". Las entidades urbanas y ru-

rales que hoy representan realmente a las Pymes deberán afianzar una acción común, con una propuesta alternativa. Habrá que desechar falsas entidades y personajes, comprometidos con la dictadura y el menemismo y que hoy se suben a la ola del gobierno de Kirchner.

Somos conscientes de que para alcanzar este objetivo es necesaria la integración con los países de América latina y el Caribe. El MERCOSUR debe ser profundizado dando lugar a un papel activo de las Pymes y los trabajadores. Apostamos por un país productivo que genere trabajo, industrial y agrario, con especial énfasis en la tecnología adecuada, que renacionalice la economía y recupere para el erario público y el estado, los resortes y empresas básicas del patrimonio nacional.

Con esta visión totalizadora creemos que los capitales auténticamente nacionales, la mayor parte de las Pymes urbanas y rurales, los sectores medios, junto con los trabajadores ocupados y desocupados podrán conformar el **"nuevo sujeto" de cambio social** con vistas a sustentar una alternativa de contenido nacional, de democracia participativa, de un nuevo tipo de Estado que garantice una economía social con justicia, libertad e independencia.

Enero 2004